

especial para Inter Press Service  
México: la vida pública se narcotiza  
por miguel ángel granados chapa

La aprehensión de dos generales del Ejército, el mayor rango en las fuerzas armadas mexicanas, que cumplían delicadas funciones militares y policiacas, ha sido una llamada de alerta sobre la extensión y talla de la penetración del narcotráfico en la vida pública mexicana. Pero no es, rigurosamente hablando, una sorpresa. Ni es tampoco un fenómeno aislado, que se pueda extirpar encarcelando a sus protagonistas, ya que parece estar asociado al sistema político mexicano, dominado por un solo partido durante cerca de setenta años.

El general Jesús Gutiérrez Rebollo fue jefe de la quinta región militar, con sede en Guadalajara, la segunda ciudad más importante de México. Luego, duró sólo dos meses como jefe de la lucha contra la droga, un alto cargo policiaco que depende de la autoridad civil. Pero su designación fue propuesta por el secretario (ministro) de la Defensa, general Enrique Cervantes, que ha tenido una participación creciente en los asuntos públicos y se ha convertido en sostén del debilitado Presidente Zedillo. El propio ministro tuvo que anunciar la defenestración de su subordinado, y explicar que los éxitos en el combate al narcotráfico que antes justificaron su nombramiento eran en realidad acciones de una banda contra otra. Poco después, otro general que se encargaba de la justicia militar y el

servicio de inteligencia en el mismo cuartel, fue denunciado por ofrecer a un tercer general un soborno de un millón de dólares por mes, para proteger a otra mafia de narcotraficantes, que controla Tijuana, un importante paso fronterizo de la droga que se consume en Estados Unidos.

No es nueva la participación de altos jefes militares en negocios relacionados con los narcóticos. De hecho, el combate cerrado contra las bandas, que data de 1985, y que ha ocurrido bajo presión del gobierno de Washington, tuvo su origen en un lance donde intervinieron soldados y oficiales del Ejército. En noviembre de 1984 fue destruído un enorme plantío de mariguana en el estado fronterizo de Chihuahua, custodiado por militares. Lo descubrió Enrique Camarena, un agente de la DEA comisionado en México, que pronto pagó esa audacia. En febrero siguiente fue secuestrado y salvajemente asesinado en Guadalajara, en un episodio que desató la ofensiva norteamericana contra la corrupción que impedía en México el eficaz combate a los cárteles que entonces actuaban en asociación con los colombianos, pero que han ido cobrando autonomía.

Esa presión sin embargo no ha logrado sus metas, lo que explica la irritación de sectores habitualmente contrarios a México en el Congreso y la sociedad norteamericana, que encuentran en esa ineficacia corrupta un rico filón que explotar. El crecimiento del narcotráfico sólo se explica, en efecto, por conexiones de muy alto nivel, que sólo se pueden suponer. Por ejemplo, el general Gutiérrez Rebollo, preso ahora en un penal de alta seguridad, permaneció seis

años, mucho más tiempo del normal, al frente de la fuerza militar en Guadalajara, y en ese lapso se cometieron en esa ciudad incontables atentados y homicidios que eran claros ajustes de cuentas. Sólo con la aprobación de sus jefes, el ministro de la Defensa y el Presidente de la República pudo Gutiérrez Rebollo mantenerse en ese cargo no obstante tales acontecimientos, y luego ser ascendido a un puesto clave para la operación de las mafias.

A pesar de que se ha documentado que la corrupción también afecta a los miembros del Ejército (un general y varios oficiales están presos por haber muerto a agentes policiacos en 1991, en un claro acto de protección a mafias) ha crecido la presencia de oficiales y jefes en las filas policiacas, en un desesperado intento gubernamental de poner fin a la corrupción que mina a la policía federal. Pero que no es ese el remedio lo muestra el caso de Humberto García Abrego. Se trata del financiero, encargado del lavado de dinero en el cártel del Golfo, cuyo jefe es su hermano, Juan García Abrego, preso en Texas luego de que la DEA forzó su detención en México y su entrega a las autoridades norteamericanas. El financiero fue dejado en libertad por un tribunal, y cuando se le detuvo inmediatamente para iniciarle un nuevo proceso, dos militares convertidos en agentes antinarcóticos simplemente lo dejaron ir. El gobierno embargó la noticia de esta fuga hasta que el Presidente Clinton otorgó al gobierno de México la certificación de buen combate a las drogas, el 28 de febrero pasado, y luego anunció una colosal batida para

reaprehender a García Abrego. Pero no debió ser muy intensa puesto que no ha sido detenido, a pesar de que poco después de su huida un reportero lo entrevistó en la propia ciudad de México.

Jueces y fiscales se incriminan recíprocamente por la frecuencia con que los procesados por narcotráfico quedan en libertad, debido a la debilidad de las acusaciones. Y se justifican también diciendo que actúan bajo presión, amenazados por las bandas, que en efecto han asesinado a un buen número de funcionarios de la Procuraduría General de la República. No está siempre claro, sin embargo, si se les mata porque cumplieron su deber o porque faltaron a compromisos con los narcotraficantes que ordenan su ejecución.

Aunque se sospecha que políticos de alto nivel son patrocinados por el narcotráfico o se dedican a él, no se ha iniciado juicio alguno contra nadie por esa causa. Mario Ruiz Massieu, retenido en Estados Unidos por haber depositado en un banco texano nueve millones de dólares en sólo un año, acaba de perder la mayor parte de esa suma, pero no se le entabló juicio criminal a pesar de la sospecha de que ese dinero proviene de recompensas pagadas por el narcotráfico. Ruiz Massieu fue el número dos de la Procuraduría General de la República.

Igualmente se supone que la fortuna de Raúl Salinas, hermano mayor del expresidente de la República Carlos Salinas y preso por el asesinato del número dos del PRI, guarda relación con la droga. Otros miembros de esa familia

han sido mencionados en los medios de información y en sumarios desarrollados en Estados Unidos sobre sus conexiones con las mafias de la droga. Pero no se ha entablado juicio contra ninguno de ellos. Recientemente dos gobernadores estatales fueron denunciados en una información de primera plana de *The New York Times* por su relación con el narcotráfico, pero tampoco han sido llevados a juicio.

Esa impunidad generalizada puede empezar a romperse después de las elecciones legislativas de julio próximo. Los dos partidos opositores más importantes han tomado la bandera de combatir la corrupción asociada al narcotráfico. Su probable victoria, que les permitiría controlar el Congreso por primera vez en la historia reciente, es la única esperanza de que sea verdadero y no simulado el combate al narcotráfico